

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de doble nacionalidad entre el Estado español y la República de Bolivia.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL
Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES

POR CUANTO el día 12 de octubre de 1961, el Plenipotenciario de España firmó en La Paz, juntamente con el Plenipotenciario de Bolivia, un Convenio de doble nacionalidad entre el Estado español y la República de Bolivia, cuyo texto certificado se inserta seguidamente:

Su Excelencia el Jefe del Estado español y su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia, en el deseo de afirmar los vínculos que unen a los dos pueblos, que forman parte de una comunidad caracterizada por la identidad de tradiciones, cultura y lengua, han acordado suscribir un Convenio de doble nacionalidad, y a este fin han designado por sus Plenipotenciarios:

Su Excelencia el Jefe de Estado español, al excelentísimo señor don Joaquín Rodríguez de Gortázar y Pastor, Embajador extraordinario y Plenipotenciario de España en Bolivia,

Su Excelencia el Presidente constitucional de Bolivia, al excelentísimo señor doctor don Eduardo Arce Quiroga, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Los cuales, después de haber cambiado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

Artículo primero

Los españoles y los bolivianos podrán adquirir la nacionalidad boliviana o española, respectivamente, en las condiciones y en la forma prevista por la legislación en vigor en cada una de las Altas Partes contratantes, sin perder por ello su anterior nacionalidad.

Sin embargo, los que hubiesen adquirido la nacionalidad española o boliviana por naturalización, no podrán acogerse a las disposiciones del presente Convenio.

La calidad de nacionales se acreditará ante la autoridad competente, en vista de los documentos que ésta estime necesarios.

Artículo segundo

Los españoles que hayan adquirido la nacionalidad boliviana, conservando su nacionalidad de origen, deberán ser inscritos en el Registro Civil boliviano, y los bolivianos que hayan adquirido la nacionalidad española, conservando su nacionalidad de origen, deberán ser inscritos en el Registro Civil español.

Las autoridades competentes de cada país a que se refiere el párrafo anterior, comunicarán las inscripciones a que se hace referencia en el mismo a la Embajada respectiva de la otra Parte contratante.

A partir de la fecha en que se hayan practicado las inscripciones, los españoles en Bolivia y los bolivianos en España, gozarán de la plena condición jurídica de nacionales, en la forma prevista en el presente Convenio y en las Leyes de ambos países.

Artículo tercero

Para las personas a que se refiere el artículo anterior, el otorgamiento de pasaporte, la protección diplomática y el ejercicio de los derechos civiles y políticos se regirán por la Ley del país donde se hayan domiciliado, que también regirá para los derechos de trabajo y de seguridad social.

Los súbditos de ambas Partes contratantes, a que se hace referencia, no podrán estar sometidos simultáneamente a las legislaciones de ambas, en su condición de naturales de las mismas, sino sólo a las de aquélla en que tengan su domicilio.

El cumplimiento de las obligaciones militares se regulará por dicha legislación, entendiéndose cumplidas las ya satisfechas en su país de origen con arreglo a sus Leyes, y quedando el interesado en la situación militar que por su edad le corresponda.

El ejercicio de los derechos civiles y políticos, regulado por la Ley del país del domicilio, no podrá surtir efectos en el país de origen si ello lleva aparejada la violación de sus normas de orden público.

Artículo cuarto

A los efectos del presente Convenio, se entiende adquirido el domicilio en aquel país en el que se haya inscrito la adquisición de la nacionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo.

Este domicilio puede cambiarse sólo en el caso de traslado de la residencia habitual al otro país contratante y de inscribirse allí ante las autoridades competentes.

En el caso de que una persona que goce de la doble nacionalidad trasladase su residencia al territorio de un tercer Estado, se entenderá por domicilio, para todos los efectos legales, el último que hubiera tenido en el territorio de una de las dos Altas Partes contratantes.

Quienes gocen de la doble nacionalidad no podrán tener, a los efectos del presente Convenio, más que un domicilio, que será el últimamente registrado.

Artículo quinto

Las Altas Partes contratantes se obligan a comunicarse, a través de las Embajadas, en el plazo de sesenta días, las adquisiciones y pérdidas de nacionalidad y los cambios de domicilio que hayan tenido lugar en aplicación del presente Convenio, así como los actos relativos al estado civil de las personas beneficiadas por él.

Artículo sexto

Los españoles y los bolivianos que hubiesen adquirido la nacionalidad boliviana o española, renunciando previamente a la de origen, podrán recuperar esta última, declarando que tal es su voluntad, ante las autoridades competentes respectivas y de acuerdo con las disposiciones legales de cada una de las Partes contratantes.

Artículo séptimo

Los españoles en Bolivia y los bolivianos en España, que no estuviesen acogidos a los beneficios del presente Convenio, continuarán disfrutando de los derechos que les otorgan las legislaciones boliviana y española, respectivamente.

Artículo octavo

Ambos Gobiernos se consultarán periódicamente con el fin de estudiar y adoptar las medidas conducentes para la mejor y uniforme interpretación y aplicación del presente Convenio, así como las eventuales modificaciones y adiciones que de común acuerdo se estimen convenientes.

Artículo noveno

El presente Convenio será ratificado por las dos Altas Partes contratantes y las ratificaciones se canjearán en Madrid.

Entrará en vigor a contar del día en que se canjearán las ratificaciones y continuará indefinidamente su vigencia, a menos que una de las Altas Partes contratantes anuncie oficialmente a la otra, con un año de antelación, la intención de hacer cesar sus efectos.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado el presente Convenio y estampado en él sus sellos.

Hecho en la ciudad de La Paz, en doble ejemplar, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y uno.

Joaquín Rodríguez de Cortázar Eduardo Arce Quiroga

POR TANTO, habiendo visto y examinado los nueve artículos que integran dicho Convenio, oída la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, **MANDO** expedir este Instrumento de Ratificación, firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a veinticinco de enero del mil novecientos sesenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

Las ratificaciones fueron canjeadas en Madrid el 31 de marzo de 1964.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

CORRECCION de erratas de la Orden de 26 de marzo de 1964 por la que se dan instrucciones a los Servicios del Ministerio de Obras Públicas sobre la inclusión de la cláusula de revisión en los contratos de obras.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 86, de fecha 9 de abril de 1964, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 4468, segunda columna, apartado 7.5., párrafo segundo, donde dice: «Se distinguirán de las certificaciones ordinarias porque en el cuadro del ángulo superior se indicarán las siglas O.R., C.C.R. y C.R., según se trate de ordinaria revisada, ordinaria compensada y revisada y complementaria revisada.», debe decir: «Se distinguirán de las certificaciones ordinarias porque en el cuadro del ángulo superior se indicarán las siglas O.R., O.C.R. y C.R., según se trate de ordinaria revisada, ordinaria compensada y revisada y complementaria revisada.»

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 20 de marzo de 1964 por la que se aprueba el Reglamento de los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia.

Ilustrísimo señor:

De conformidad y en ejecución de lo establecido en el Decreto 342/1963, de 21 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo siguiente),

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el adjunto Reglamento de los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia.

Queda derogada la Orden de 1 de febrero de 1961 y cuantas disposiciones se opongan a lo que en el adjunto Reglamento se establece.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de marzo de 1964.

LORA TAMAYO

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.

REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS PROVINCIALES DE PSICOLOGIA APLICADA Y PSICOTECNIA

CAPITULO PRIMERO

Mision y funciones de los Institutos

Artículo 1.º Los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia tendrán a su cargo en la respectiva provincia los servicios de orientación y selección profesionales y de psicología aplicada en general que se les atribuye en el Decreto 342/1963, de 21 de febrero.

Art. 2.º Para el cumplimiento de su misión los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia llevarán a cabo las siguientes funciones:

A) En relación con la orientación profesional:

Primero. El reconocimiento médico fisiológico, la exploración psicológica y el estudio individual de los alumnos de los Centros de Formación Profesional Industrial y de Enseñanza Media y Profesional que radiquen en su respectiva provincia y la formulación del consejo vocacional individual que debe darse a cada uno de ellos al finalizar el grado de enseñanza que hayan cursado

El citado reconocimiento y exploración se realizarán con la colaboración de los Médicos y Profesores de los Centros designados a tal efecto, y con sujeción a las normas y técnicas que se dicten por la Dirección General de Enseñanza Laboral, con el dictamen y asesoramiento del Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia.

Segundo. El examen, exploración y orientación escolar de los alumnos de otros Centros oficiales o privados de la provincia que lo soliciten, así como la orientación profesional individual de quienes acudan al servicio público establecido en el Centro para tales fines.

B) En relación con la selección profesional:

Primero. La selección profesional del personal de las Empresas y servicios públicos o privados de la provincia que lo soliciten.

Segundo. El examen médico fisiológico y psicológico de los aspirantes a la expedición del permiso de conductor de vehículos automóviles residentes en la provincia respectiva, en cumplimiento de la misión que tienen atribuida en el vigente Código de la Circulación.

C) En relación con los servicios de sanidad, asistencia psiquiátrica e higiene mental de la provincia:

Primero. La colaboración en los exámenes sanitarios que se soliciten por la Jefatura Provincial respectiva.

Segundo. La exploración psicológica clínica que se recabe por los servicios asistenciales psiquiátricos y de higiene mental de la misma provincia.

Art. 3.º Para la realización de los fines señalados los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia organizarán sus servicios en tres Secciones, que se denominarán, respectivamente: Servicio Médico Fisiológico, Servicio Psicotécnico y de Psicología Aplicada y Servicio de Información y Asistencia Social.

CAPITULO II

Gobierno de los Centros

Art. 4.º Los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia estarán regidos por un Director designado libremente por el Ministerio de Educación Nacional entre el personal facultativo del propio Instituto.

Art. 5.º Serán funciones del expresado Director:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la Superioridad en relación con el régimen y actividades del Centro.

b) Diligenciar con su firma las comunicaciones, certificaciones, dictámenes y documentos que expida la Secretaría del Centro

c) Proponer el nombramiento de Secretario.

d) Ejercer la Jefatura del personal del Instituto, distribuyendo sus servicios y vigilando el cumplimiento de las obligaciones y horarios que para el mismo se establezcan.

e) Representar al Instituto en su relación con los Organismos nacionales y provinciales con los que se establezca colaboración.

f) Elevar a la Superioridad una Memoria anual de los trabajos realizados por el Instituto y remitir al Instituto Nacional